

**República de Colombia**  
**Rama Judicial del Poder Público**



**Juzgado Diecinueve Civil Municipal**

Bogotá D.C, cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022).

**Ref. No. 2018-00219.**

**Radicado No.:** 11001-40-03-019-2018-00219-00  
**Demandante:** BANCO FINANDINA S.A.  
**Demandado:** HAYDEE CECILIA MONTERO ACOSTA.  
**Proceso:** Verbal de restitución de tenencia de bien mueble.  
**Instancia:** Única instancia.

**I. ASUNTO A TRATAR**

Procede este despacho a decidir de fondo el proceso de la referencia, emitiendo el fallo de única instancia que dirime la controversia surgida entre las partes, teniendo en cuenta lo siguiente:

**II. ANTECEDENTES:**

**2.1. PRETENSIONES:**

EL BANCO FINANDINA S.A., actuando por conducto de apoderado judicial, formuló demanda verbal sumaria de restitución de tenencia contra Haydee Cecilia Montero Acosta, pretendiendo se declarara la terminación del contrato de arrendamiento financiero No. 2100219637 celebrado entre las partes respecto del bien mueble tipo automóvil Hatch Back, marca y línea Renault Sandero, con placas HTR-086, en consecuencia, se ordenara su restitución real y material, invocando como causal la mora en el pago de los cánones de arrendamiento. (fls. 13 y 14).

## **2.2.- DE LOS HECHOS**

Se afirmó, para sustentar las súplicas varios hechos, que el Despacho sintetiza de la siguiente forma:

2.1.- Mediante documento privado de fecha 27 de febrero de 2014 las partes celebraron el contrato de leasing No. 2100219637 en el que la demandante funge como entidad autorizada con atribuciones de arrendadora y la demandada como locataria con relación al bien mueble tipo automóvil Hatch Back, marca y línea Renault Sandero de placas HTR-086.

2.2.- En razón a lo anterior la pasiva se obligó a cancelar la suma de \$34.852.536 pagaderos en un plazo de 72 meses, contados a partir del 10 de abril de 2014 por valor de \$484.063 cada canon, junto con intereses remuneratorios liquidados al 14.5712% E.A.

2.3.- La accionada incumplió con la obligación de pagar la renta mensual oportunamente en las fechas acordadas desde el 10 de agosto de 2017 constituyéndose en mora por el sólo retardo en el pago sin necesidad de efectuar requerimientos. (fl. 13).

## **III. ACTUACIÓN PROCESAL**

**3.1.-** Mediante proveído de fecha 25 de mayo de 2018 se admitió la demanda de referencia, se ordenó la notificación a la demandada y el traslado a los mismos por el término de ley (fl 32).

**3.2.** La demandada Haydee Cecilia Montero Acosta se notificó en debida forma de acuerdo a lo previsto en el artículo 301 del Código General del Proceso (fl 33) quien, dentro del término legal concedido, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda formulando las excepciones denominadas:

### **i) PAGO:**

Manifestó que, si bien incurrió en mora desde agosto de 2017, realizó un acuerdo con INCOMERCIO S.A.S., efectuó los pagos y quedó al día con su obligación en enero de 2018, como consta en la certificación emitida el 25 de abril de ese mismo año, es decir, un mes antes de que se admitiera la

presente demanda, cumpliendo con la cancelación de las cuotas de leasing.

## **ii) IMPROCEDENCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE LEASING.**

Señaló el extremo demandado que el Banco Finandina el 25 de abril de 2018, expidió certificación en la que se evidencia que la obligación se encuentra: *“Estado: Vigente / Al día”*, motivo por el que la parte actora con sus actos *“negaba que quisiera terminar el contrato de Leasing objeto de la demanda siendo contradictorio su proceder y en todo caso, dejando sin valor y efecto, las pretensiones”*.

## **iii) ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE**

Para fundamentar dicha excepción, indicó que la demandante incurrió en infracción al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, puesto que, impone a sus clientes cláusulas abusivas y leoninas, como en este caso que un simple retardo se convierte en mora y sin opción a ningún tipo de negociación, ya que, al ser un contrato de adhesión se renuncia a cualquier requerimiento y vulnera el Estatuto del Consumidor que siendo una ley de orden público, es clara en establecer que las cláusulas abusivas se tienen por no escritas.

Así mismo, mencionó que la parte actora entre sus casas de cobranzas y sus abogados externos descaradamente mienten a los usuarios, como en su caso, que la obligaron a firmar el memorial de suspensión de un proceso que ni siquiera a esa fecha se había presentado la demanda y aunado a ello cuando los locatarios reclaman que tienen demandas vigentes estando al día con sus obligaciones, la respuesta de la entidad financiera es que los procesos terminan o bien por pago total de la obligación o bien por la refinanciación adicionando los gastos de cobranza y honorarios de abogados.

## **iv) TEMERIDAD DE LA ACCIÓN Y MALA FE DE LA PARTE ACTORA.**

La demandada manifestó que la parte actora ha actuado de mala fe, toda vez que, desde que se admitió la demanda ha omitido de manera deliberada informar al despacho que siempre ha estado al día con el pago

de su obligación, buscando perjudicarla y pretendiendo la terminación del contrato y la aprehensión del vehículo con argumentos infundados.

#### **v) DESLEALTAD PROCESAL**

Adujo que la arrendadora faltó a la lealtad procesal por cuanto al enterarse de las acciones judiciales iniciadas en su contra se vio obligada a firmar 3 memoriales de suspensión haciéndole creer que se solicitaría la terminación del proceso a sabiendas que desde que profirió el auto admisorio la obligación no solo estaba vigente, lo que hacía nula la petición de restitución.

**3.3.** De las excepciones propuestas se corrió traslado a la parte actora quien dentro en la oportunidad procesal correspondiente se opuso a la prosperidad de las mismas, para lo cual argumentó que al momento de presentación de la demanda la obligación se encontraba en mora, siendo ésta, una de las causales de terminación contempladas en el contrato base de la acción tal como lo acepta el apoderado de la parte pasiva y los pactos válidamente celebrados son ley para las partes.

Aunado a lo anterior, adujo que la demandada accedió con plena facultad a las condiciones del contrato de leasing sobre el vehículo de placa HTR-086 conociendo de antemano que no debía incurrir en mora sin que solicitar la terminación y la consecuente restitución pueda ser calificado como un acto de mala fe. (fl. 76 y 77).

#### **IV. PROBLEMA JURÍDICO:**

El problema jurídico a resolver en este caso es determinar si hay lugar a la terminación del contrato de leasing ajustado entre las partes y en consecuencia ordenar la restitución del bien mueble objeto del mismo.

#### **V. CONSIDERACIONES**

**1.** En el proceso se han cumplido los presupuestos procesales, en efecto, este Juzgado es el competente, la demanda reúne las exigencias legales y la existencia y representación de las partes se encuentran demostradas; tampoco existe causal alguna generadora de nulidad que invalide total o parcialmente la actuación surtida en el proceso.

**2.** De igual forma, es necesario antes de verificar los presupuestos de la acción la legitimación en la causa de los extremos de la litis, que consiste en ser la persona, que de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda, para que por sentencia de fondo se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídico sustancial pretendida en la demanda, es decir, ser sujeto activo o pasivo de dicha relación de manera tal que le legitime para intervenir en el proceso iniciado.

Tal facultad o poder no se refiere al derecho sustancial en sí, sino únicamente a la posibilidad de recurrir, afirmando tener derecho de algo o sobre algo e imputando que otro (el demandado) es el llamado a satisfacer su pretensión.

Al respecto nuestra H. Corte Suprema de Justicia, expresó: *“La legitimación en la causa, según concepto de Chiovenda acogido por la Corte, “consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva)” (Instituciones de Derecho Procesal Civil 1.185). Conviene desde luego advertir, como ya lo ha dicho esta Sala que cuando el maestro italiano y la Corte hablan de “acción” están empleando el vocablo como sinónimo de “Derecho de pretensión” que se ejercita frente al demandado. “Para que esa pretensión sea acogida en la sentencia es menester entre otros requisitos que se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado. De donde se sigue que lo concerniente a la legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del derecho procesal, razón por la cual la ausencia no constituye impedimento para desatar el fondo del litigio sino motivo para decidirlo en forma adversa al actor”.* (G.J.T. CLXVI, pág.636)

Ahora bien, respecto del contrato de leasing el artículo 2º del Decreto 913 de 1993 *“Por el cual se dictan normas en materia del ejercicio de la actividad de arrendamiento financiero o leasing”, dispone que la operación de arrendamiento financiero como “la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del período una opción de compra.”*

*En consecuencia el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que se conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Así mismo, debe entenderse que el costo del activo dado en*

*arrendamiento se amortizará durante el término de duración del contrato, generando la respectiva utilidad.”*

El contrato de leasing, puede ser definido como un negocio jurídico atípico que constituye en lo fundamental un negocio de **intermediación financiera**, que sólo puede celebrarse sobre bienes de propiedad de la entidad financiera que realizará la operación, siendo necesario igualmente resaltar que, en línea de principio, la empresa especializada adquiere el dominio de los bienes por causa del ulterior contrato que acordará con el usuario.

Con otras palabras, no se puede entregar la tenencia de un bien a título de leasing, si la sociedad aludida no es, la dueña del mismo, si bien la adquisición del dominio, es la regla, obedece a la necesidad de celebrar dicho contrato en particular<sup>1</sup>, de ahí que sea esta entidad la legitimada para ejercer la acción de restitución, y por ende, teniendo en cuenta que el negocio jurídico en comento implica la entrega del bien al arrendatario o locatario sería éste quien se encuentra en la obligación de restituir la cosa en caso de presentarse un incumplimiento contractual pues la opción de compra sólo se puede ejercer al final del periodo.

**2.1.** En el caso bajo estudio, se advierte que los acá demandante y demandada, esto es, BANCO FINANDINA S.A en su calidad de propietaria del bien mueble tipo automóvil Hatch Back, marca y línea Renault Sandero de placas HTR-086, celebró el contrato de arrendamiento financiero o leasing No. 2100219637 con la señora Haydee Cecilia Montero Acosta, en condición de locataria, conforme se reconoció por cada uno de ellos al presentar la demanda y contestar la misma, por lo que no cabe duda que son los legitimados para intervenir por activa y por pasiva en el litigio.

Recuérdese que la comprobación de la legitimación en la causa, no hace referencia a que las pretensiones sean prósperas o no, sino únicamente al requisito de que la acción se presentara por quien la ley sustancial ha establecido tiene el derecho de hacerlo y contra quien puede contradecirle.

---

<sup>1</sup> CSJSCC. Sentencia de 25 de septiembre de 2007. Ref: Exp. No. 11001-31-03-027-2000-00528-01

**3.** Aclarado lo anterior, entra, entonces, el Juzgado a analizar la viabilidad de las pretensiones de la demanda y para el efecto, es necesario señalar que, aunque el contrato de leasing comporta ciertas particularidades que lo hacen diferente a otros negocios jurídicos regulados por la ley y no puede ser gobernado exclusivamente por las normas que son propias de negocios típicos, lo cierto es que, si guarda algunas semejanzas con otros contratos, como el de arrendamiento, por lo tanto, en materia procesal es dable aplicar las disposiciones atinentes a dicho acuerdo, en particular lo consagrado en el artículo 385 de la ley adjetiva.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en el estudio de una acción constitucional, señaló: *“la disposición en comento se refiere, exclusivamente, a la “restitución” que tiene como báculo el arrendamiento; de suerte que el pleito originado en un “leasing” se regula, inicialmente, por el artículo 385 ibídem, que remite, en lo pertinente, a la norma precedente.”*<sup>2</sup>

Bajo esta perspectiva, cumple precisar que para que prospere la acción de restitución de inmueble arrendado, que implica no solo la terminación del convenio de alquiler, sino la orden de restitución del bien por parte del demandado, debe acreditarse principalmente los siguientes presupuestos:

- (i) La existencia de un contrato de arrendamiento; y
- (ii) El incumplimiento del arrendatario en alguna de sus obligaciones.

**3.1** Frente a la primera exigencia, el artículo 384 del Código General del Proceso, si bien exige para promover el proceso de restitución de inmueble arrendado aportar con la demanda la prueba del contrato, lo permite hacer de varias formas, con la *“prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de éste hecha en interrogatorio de parte extraprocesal, o prueba testimonial siquiera sumaria”*. (Numeral 1°).

En otras palabras, dicho convenio puede demostrarse por cualquiera de los medios previstos en la ley adjetiva, incluyendo la prueba sumaria.

**3.1.1** En el sub-lite, la parte demandante, con miras a demostrar la existencia del contrato de arrendamiento, aportó el contrato de leasing

---

<sup>2</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC5878-2020, M.P. Luis Armando Tolosa.

No.2100219637 celebrado por las partes del litigio mediante el cual BANCO FINANADINA S.A entrega a Haydee Cecilia Montero Acosta en calidad de locataria la tenencia del bien mueble tipo automóvil Hatch Back, marca y línea Renault Sandero de placas HTR-086 y ésta a su vez se comprometió a pagar durante el término de ejecución, setenta y dos (72) cánones por la suma \$484.063 cada uno, pagaderos el diez de cada mes a partir del 10 de abril de 2014. Documento que reviste pleno valor probatorio en la medida que no fue desconocido o tachado de falso por la parte demandada (art. 246, C.G.P.).

Con lo anterior se acredita a cabalidad la existencia de la relación jurídica entre las partes, la legitimación que les asiste en el presente asunto y las obligaciones recíprocas como la de conceder el uso y goce de una cosa (arrendador) y la de pagar por ese goce o servicio (arrendatario).

**3.2.** Aclarada la vida del contrato y sus condiciones, de acuerdo a las pruebas obrantes en el expediente, debe revisarse el segundo presupuesto, esto es, el incumplimiento de la convención por parte de la arrendataria demandada.

En el asunto que ocupa nuestra atención, el pilar sobre el cual se ha construido la acción restitutoria, ha sido la mora en el pago de los cánones de arrendamiento a partir del 10 de agosto de 2017, por lo que es necesario establecer que conforme se dejó sentando en precedencia, los contratantes pactaron que el canon mensual de arrendamiento sería de \$484.063 a partir del 10 de abril de 2014 y los siguientes el mismo día de cada mes.

Es principio universal, en materia probatoria, que corresponde a las partes demostrar todos aquellos hechos que sirvan de presupuesto a la norma que consagra el derecho que ellas persiguen, o en términos de la legislación procesal civil patria, le *“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*<sup>3</sup>. Lo anterior implica que, si la parte que debe correr con dicha carga, se desinteresa de ella, esa conducta, por regla general, puede encaminarla a obtener una decisión adversa.

---

<sup>3</sup> Artículo 167 del Código General del Proceso.



Así las cosas, y como en el presente evento, la causal alegada constituye una afirmación indefinida, tal situación releva a la demandante de su comprobación, de acuerdo con el contenido del artículo 167 del Código General del Proceso, todo lo cual indica que en este aspecto se invierte la carga de la prueba en cabeza de la parte demandada, a quien le correspondía desvirtuar la veracidad de lo afirmado por su contraparte.

Ahora bien, para demostrar que no estaba en mora, la convocada presentó con la contestación de la demanda una certificación de fecha 25 de abril de 2018 emitida por el Banco Finandina en la que se constata que para dicha data se encontraba al día respecto de la obligación No 2100219637 derivada del contrato de leasing aportado como base de la acción restitutoria (fl. 62)., la cual no fue tachada de falsedad y/o desconocida por la parte demandante al momento de descorrer el traslado de las excepciones propuestas por el extremo demandado, por ende, adquieren pleno valor probatorio.

No obstante, cumple precisar que en los hechos de la demanda la parte actora manifestó que la locataria incumplió el contrato de leasing suscrito por no cancelar de manera oportuna los cánones de arrendamiento a partir el 10 de agosto de 2017 (hecho 5°).

Por su parte, el extremo pasivo representado por intermedio de apoderado, al momento de contestar la demanda, aceptó como parcialmente ciertos tales supuestos de hecho en el entendido que, la señora Haydee Cecilia Montero Acosta **“efectivamente incurrió en mora”** (fl.69), sin embargo, el apoderado judicial de la actora omitió informar que para la fecha en que se admitió la demanda su poderdante se encontraba al día.

Es decir, que en aplicación a lo establecido en el art. 193 del C.G. del P., ante dichas manifestaciones, claramente estamos en presencia de lo que el legislador denominó confesión por apoderado judicial, en tanto, prevé el citado precepto normativo: *“La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.”* (Negrillas del Juzgado).

Lo anterior, quiere decir que, la confesión realizada por el apoderado judicial de la parte demandada, tiene pleno valor probatorio, en tanto así

lo dispuso el legislador, máxime cuando precisó que: “(...) Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”-art. 193 del C.G.P.-.

Por ende, es dable atribuirle el alcance de aceptar el incumplimiento por parte de la locataria de las condiciones contractuales pactadas, amén que lo dicho en precedencia guarda relación con el plan de pagos obrante al interior del asunto en el que se verifica que la convocada incurrió en mora en el pago de los cánones de arrendamiento desde el 10 de agosto de 2017 hasta el 10 de marzo de 2018 cuando se normalizó la obligación.

Luego queda demostrado que, para el mes de agosto del 2017 y hasta después de la presentación de la demanda (1 de marzo de 2018), los pagos del canon de arrendamiento se realizaron de manera parcial y fuera del mes de causación, incurriendo en el incumplimiento en el pago oportuno de las rentas o cumplimiento tardío de la obligación. Es más, la propia convocada en la contestación de la demanda no desconoció la mora endilgada, simplemente hace referencia a que cuando se admitió la demanda ya se encontraba al día.

Sobre este aspecto el numeral 1º del artículo 1608 del Código Civil establece como regla general que el deudor se encuentra en mora cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos excepcionales, exija un requerimiento para constituirlo como tal, siendo es así, en lo que tiene que ver con el contrato de arrendamiento como desarrollo a dicho precepto el canon 2002 ibídem señala que: “*El pago del precio o renta se hará en los periodos estipulados, o a falta de estipulación, conforme a la costumbre del país, y no habiendo estipulación ni costumbre fija, según las reglas que siguen: La renta de predios urbanos se pagará por meses, la de predios rústicos por años.*”

En ese entendido, se observa que en asuntos de esta naturaleza cuando el arrendatario no cancela de forma puntual u omite definitivamente el pago de los cánones de arrendamiento conforme a lo estipulado en el contrato se habilita al arrendador para solicitar la terminación del acuerdo y la consecuente restitución de la cosa arrendada, acreditándose como una causal de incumplimiento el pago extemporáneo, sin que la aceptación de los pagos efectuados con posterioridad a las fechas pactadas implique de modo alguno la modificación o novación de las condiciones contractuales.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, expresó:

*“Hay que señalar, en el evento en que el arrendatario no cancele de manera puntual la renta o la omitan definitivamente se configura una causal de terminación unilateral del contrato que faculta al arrendador para iniciar la demanda de restitución de inmueble arrendado con el objeto que sea el juez que ordene la terminación del contrato por incumplimiento y la consecuencial restitución del inmueble a manos del arrendador.»*

*El pago extemporáneo del canon de arrendamiento, la principal obligación del arrendatario es pagar el canon de arrendamiento dentro del término acordado por las partes o a falta de estipulación según la regla del artículo 2002 del Código Civil el cual establece que el pago del precio o renta se hará en los periodos estipulados o a falta de estipulación conforme a la costumbre del país; (...) por el hecho que el arrendador reciba los pagos de que cánones de arrendamiento de manera extemporánea no purga la mora del arrendatario si fuese esa la causal alegada en la demanda, pues esta conducta lo que busca es aminorar los perjuicios que sufre el demandante por el eventual incumplimiento del arrendatario, no puede perderse de vista que cuando la causal invocada es la mora, para efecto de determinar si existe o no la misma, se debe mirar las circunstancias existentes hasta la presentación de la demanda, **siendo por entero indiferente que el demandante retire o reciba la suma de dinero que se haya pagado a su favor con lo cual queda erradicada la equivocada creencia de estimar que recibir los dineros correspondiente a los pagos implica aceptación de ellos y la desaparición de la mora.**”<sup>4</sup> (énfasis fuera de texto).*

**3.2.1** En atención a las líneas jurisprudenciales y legales esbozadas, como se adujo en párrafos precedentes, en el caso de marras pese a que la parte demandada aportó una constancia a fin de acreditar que no existe mora en la renta causada, se observa que a partir del mes de agosto de 2017 no se cancelaron las mensualidades de forma oportuna de acuerdo con las fechas pactadas por los contratantes y en los montos establecidos, esto es, el diez (10) de cada mes, luego entonces, sobre este aspecto concreto, se encuentra plenamente acreditada la causal de incumplimiento invocada aun cuando la compañía de financiamiento recibió los pagos de forma extemporánea, pues se itera esta circunstancia no tiene la virtualidad de purgar la mora en que incurrió la arrendataria al no cancelar los cánones de arrendamiento en el término acordado.

En ese orden de ideas, ha quedado sentada la viabilidad de las pretensiones en razón a la ocurrencia de la causal de mora en el pago de

---

<sup>4</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, STC15519-2017, M.P. Ariel Salazar Ramírez.

los cánones de arrendamiento, suficiente para dar por terminado el contrato y ordenar la restitución del bien inmueble objeto del mismo.

4. Sin embargo, por cuanto la parte demandada presentó oposición a las pretensiones de la demanda, se procede a analizar la viabilidad de las excepciones formuladas.

#### **4.1. EXCEPCIONES DE PAGO E IMPROCEDENCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE LEASING.**

El despacho analizará de forma conjunta las excepciones antes mencionadas, toda vez que, se fundamentan en que, para la data en que se admitió la demanda de restitución de tenencia, la demandada se encontraba al día en los pagos de los cánones de arrendamiento y la obligación estructurada entre las partes estaba vigente.

A propósito de los medios exceptivos planteados, resulta de carácter imperativo traer a colación nuevamente lo dispuesto en el artículo 1608 de la normatividad civil frente a la mora del deudor, que al tenor reza:

*“El deudor está en mora:*

*1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.*

*2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla.*

*3o.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor.”*

Es decir, que tratándose de obligaciones sometidas a plazo si el deudor no cumple con la prestación dentro del término pactado incurre en mora de forma automática sin necesidad de que exista un requerimiento por parte del acreedor. Sobre el particular en comentarios al Código Civil el tratadista Jorge Ortega Torres expreso:

*“Se define la mora del deudor como «el retraso, contrario a derecho, de la prestación por una causa imputable a aquel». Según el artículo 1608 del C.C. para que se*

*produzca la mora automáticamente, debe fijarse término para el cumplimiento de la obligación. (...) (Cas., 19 de julio de 1936, XLIV, 65).*

*Un requerimiento es un acto judicial por el cual a petición del interesado se requiere al deudor para que entregue, haga o deje de ejecutar una cosa. En nuestro sistema jurídico el requerimiento es simplemente una condición que la ley exige en determinados casos para dar aplicación a la teoría general de la mora (Auto, S de N G., 25 de mayo de 1937, XLV, 543). ”<sup>5</sup>*

Aplicada las nociones anteriores al caso concreto, como quiera que en el contrato de arrendamiento financiero se pactaron obligaciones que debían ser atendidas por la locataria de forma periódica por tratarse de un convenio de ejecución sucesiva, se fijó un plazo para pagar la renta mensual, por tanto, teniendo en cuenta que la deudora no canceló el canon correspondiente al 10 de agosto de 2018, a partir de ese momento, se constituyó en mora de forma automática.

En ese orden de ideas, pese a que se encuentra demostrado que al 25 de abril de 2018 la obligación derivada del contrato leasing No. 2100219637 se encontraba en estado vigente y al día, lo cierto es que, esta circunstancia en sentido estricto no basta para desacreditar el incumplimiento en que incurrió la demandada al cancelar el valor de los cánones de forma parcial y extemporánea sin que revista relevancia jurídica la normalización de la deuda con anterioridad a la admisión del libelo introductor (25 de mayo de 2018) puesto que la mora en efecto existió y así lo reconoció el extremo pasivo del litigio al contestar la demanda, incluso la misma se mantenía para la fecha de la presentación del libelo introductorio (1 de marzo de 2018).

Así las cosas, bajo ninguna tesitura puede considerarse improcedente la solicitud de terminación del acuerdo celebrado por las partes y la posterior restitución del bien objeto del mismo pues, se traduce en la consecuencia jurídica que acarrea el incumplimiento por parte de alguno de los contratantes, es más, así quedó plasmado en la cláusula décimo sexta del contrato de arrendamiento financiero suscrito, que al tenor cita:

*“CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Son causales de terminación de este contrato además de las previstas en la ley, las siguientes: a) El mutuo consentimiento*

---

<sup>5</sup> (1969) Código Civil, Sexta Edición por Jorge Ortega Torres comentarios al artículo 1608, Editorial Temis de Bogotá.

*de las partes. b) El vencimiento del término de duración. c) el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas (...) PARÁGRAFO PRIMERO: Terminación unilateral por justa causa: Especialmente, sin requerimiento privado o judicial, EL BANCO podrá dar por terminado este contrato antes del vencimiento del término, sin necesidad de declaración judicial, y exigir la devolución del bien, así como las demás prestaciones a que hubiere lugar, en cualquiera de las siguientes situaciones: 1) El no pago del canon por un periodo por un periodo o más..." (fl 4).*

En conclusión, con el material probatorio recaudado, entre estos la confesión de la demandada y la prueba documental aportada, se acreditó de manera fehaciente el incumplimiento de la obligación principal en cabeza del arrendatario, quien conocía de antemano las condiciones que regían dicha relación, razones suficientes para declarar no fundadas las excepciones impetradas.

#### **4.2. ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE**

Adujo la excepcionante que BANCO FINANADINA S.A con sus prácticas comerciales incurrió en una infracción del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Estatuto del Consumidor sometiendo a sus clientes a cláusulas abusivas y leoninas en contratos de adhesión.

Frente a dicho reparo, lo primero que debe advertir el despacho es que los preceptos consagrados en la Ley 1480 de 2011 "*Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones*" no resultan aplicables en el caso de marras en virtud del artículo 2º de la norma en cita, habida cuenta que tratándose de asuntos relacionados con el sector financiero existe una regulación especial la -Ley 1328 de 2009.

Al margen de lo anterior, incluso a la luz de la citada normatividad tampoco se observa que los argumentos esgrimidos tengan vocación de prosperidad pues infortunadamente, por injusta que le pueda parecer a la excepcionante las condiciones bajo las cuales se estableció el negocio jurídico que ahora ocupa la atención del despacho, los supuestos actos abusivos alegados por la demandada surgieron en razón al incumplimiento de ésta última y no en el momento en que se celebró el contrato, por lo cual ante la existencia de la mora la entidad financiera simplemente actúa en calidad de arrendadora a quien le asiste el derecho de solicitar la restitución de la cosa.

Ahora bien, en aras de la precisión técnica jurídica ha de llamarse la atención sobre el concepto del abuso de la posición dominante. Esta no es una acepción que ha de predicarse en una relación contractual donde simplemente exista una posición avasalladora o abiertamente superior de una de las partes respecto de la otra. La posición dominante es un concepto que ha de traerse de las normas de competencia y derivarse de una situación particular específica de uno o varios agentes de mercado que concentran una gran parte de dicho mercado en relación con un producto o servicio, en materia generalmente de precios o de prácticas competitivas desleales. Incluso en competencia y normas de integración empresarial se ha establecido en la práctica un porcentaje aplicable al concepto, se dice que quien concentra más del 25% de un mercado necesariamente puede ser catalogado como un agente que ostenta una posición dominante.

Nada tiene que ver pues con la situación del usuario de un producto financiero frente al banco, pues, aunque en este evento se produce sin lugar a dudas una desigualdad palmaria, protuberante respecto de una entidad que fija unas condiciones a su contraparte, éste deudor las acepta al momento de la celebración del contrato y en ese sentido se sujeta a las reglas del contrato. No por ello puede con el transcurso del tiempo, aducir el cambio de las mismas pues de aceptarse, ello sí generaría un cambio sustancial en la relación jurídica inicial por circunstancias externas al crédito, lo cual no es posible sino con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1602 del Código civil en materia de asuntos contractuales. El contrato es ley para ellas y solo puede ser modificado por ellas en la misma forma de su celebración. Sobre el particular la jurisprudencia

*“...si bien es cierto, dentro de las actividades que atañen con el comercio de capitales y la financiación de obras, el Banco demandado ocupa de ordinario, una posición dominante frente al usuario de los servicios que ofrece, condición que le permitía imponer ciertas y determinadas reglas rígidas de contratación, usualmente genéricas, en cuanto comunes para una colectividad, permanentes y minuciosas, no es menos cierto que los supuestos actos abusivos por los que se duele el censor no tuvieron su génesis en el proceso de celebración del contrato de mutuo o en su ejecución, ámbito dentro del cual, se reitera, es innegable, por regla general, la preeminencia de las instituciones crediticias, sino, por el contrario, en una etapa posterior determinada por el incumplimiento del deudor de las prestaciones a su cargo, órbita dentro de la cual aquella preponderancia de la que se ha venido hablando, se minimiza pues la*

*posición del Banco no es distinta de la de cualquier acreedor hipotecario a quien se le incumple o retarda el pago de la prestación debida.”<sup>6</sup>*

De acuerdo a lo anterior, dado que la parte demandada tenía pleno conocimiento de las cláusulas y términos que regirían la relación contractual al momento de la suscripción del acuerdo, por falta de asidero legal que comprometa la situación debatida, la excepción corre la misma suerte que las anteriores.

#### **4.3. TEMERIDAD DE LA ACCIÓN Y MALA FE DE LA PARTE ACTORA Y DESLEALTAD PROCESAL.**

Considera la parte encartada que existe mala fe, temeridad y deslealtad procesal de la actora, toda vez que, formuló la demanda de restitución a sabiendas que la obligación ya se encontraba normalizado estando al día con el pago de los cánones, además omitió informar tal situación al juzgado.

Respecto de la temeridad y mala fe cabe aclarar que se trata de figuras distintas, la primera de las nombradas consiste en obrar, con imprudencia, inconsideración, ignorancia de la ley, falta de fundamento, entre otros. Por su parte la mala fe<sup>7</sup>, en un concepto general, implica actuar a sabiendas de la ilicitud de lo que se hace, sin la convicción de actuar conforme a derecho y las sanas costumbres.

Sobre este tópico la H. Corte Constitucional en el estudio de estas dos instituciones, en Sentencia T-655/98<sup>8</sup>, explicó que:

*(...) **la actuación temeraria** es aquella que vulnera el principio constitucional de la buena fe (C.P., artículo 83) y, por tanto, ha sido entendida como "la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso."*<sup>9</sup> *En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte como aquella que supone una "**actitud torticera**",<sup>10</sup> que "**delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual***

---

<sup>6</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 9 de agosto de 2000, Expediente 5372, M.P. Jorge Antonio Castillo Rúgeles.

<sup>7</sup> “Jurídicamente, buena fe es voluntad conforme al derecho, o sea, voluntad del derecho.” (Carnelutti, Francesco. Teoría General del Derecho. Pag. 292)

<sup>8</sup> M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

<sup>9</sup> T-327/93 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

<sup>10</sup> T-149/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.



**a toda costa",<sup>11</sup> que expresa un abuso del derecho porque "deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción",<sup>12</sup> o, finalmente, constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia".<sup>13</sup>**

*En estas circunstancias, y en la medida en que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares ante las autoridades públicas (C.P., artículo 83), la temeridad es una situación que debe ser cuidadosamente valorada por los jueces con el fin de no incurrir en situaciones injustas. Por esta razón, la Corporación ha estimado que la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la acción de tutela. Así, tal conducta "requiere de un examen cuidadoso de la pretensión de amparo, de los hechos en que ésta se funda y del acervo probatorio que obre dentro del proceso, que lleve al juzgador a la fundada convicción de que la conducta procesal de la respectiva parte carece en absoluto de justificación." <sup>14</sup> (negrillas del Despacho).*

Ahora bien, concretamente en punto del principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política ha de partirse del hecho que se presume de todas las actuaciones adelantadas por particulares y autoridades públicas, tratándose entonces de una presunción legal que para ser desvirtuada exige la demostración fehaciente de conocer la ilicitud del acto. Al respecto el máximo tribunal en materia constitucional precisó:

*"La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero **dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.**"<sup>15</sup>(énfasis fuera de texto)*

Conforme a las precisiones jurisprudenciales citadas, verificada la conducta adoptada por la parte actora no se advierte que la presentación de la demanda constituya una actuación temeraria o de mala fe, pues se deriva del ejercicio que la ley le otorga para exigir la resolución de un

---

<sup>11</sup> T-308/95 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>12</sup> T-443/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

<sup>13</sup> T-001/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>14</sup> T-300/96 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Véanse, también las sentencias T-082/97 M.P. Hernando Herrera Vergara; T-080/98 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-303/98 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>15</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

contrato por las obligaciones que no han sido sufragadas por el demandado en los términos pactados, luego entonces de existir alguna irregularidad en su forma obrar, en atención al principio de buena fe y de acuerdo a la carga de la prueba plasmada el artículo 167 del Código General del Proceso correspondía al extremo pasivo demostrar su dicho sin que hubiese aportado al plenario ningún elemento de juicio para tal fin, de ahí que el medio exceptivo se encuentre llamado al fracaso.

Aunado a ello, en punto de la deslealtad procesal en el asunto particular tampoco se evidencia que la entidad financiera convocante haya faltado o desacato alguna de las cargas que le conciernen de cara al proceso judicial que acá se adelanta, pues se dio cumplimiento a las actuaciones dentro de los términos procesales sin la utilización de maniobras dilatorias, no se han realizado manifestación que no correspondan a la realidad o al menos no se encuentra demostrado que así haya sido ora un uso indebido de los medios de defensa judicial que afecten el derecho fundamental del debido proceso de las partes.

De lo anterior deviene la improsperidad de las excepciones de mérito propuestas por el extremo demandado y, en consecuencia, se decretará la terminación del contrato de leasing estructurado entre las partes con relación al bien mueble tipo automóvil Hatch Back, marca y línea Renault Sandero de placas HTR-086, así como, se condenará en costas del proceso.

## **VI. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto anteriormente, el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

## **IV. RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR INFUNDADAS** las excepciones de mérito alegadas en la contestación de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: DECLARAR** terminado el contrato de leasing No.2100219637 celebrado entre el BANCO FINANDINA S.A y Haydee Cecilia Montero Acosta en calidad de locataria sobre el bien mueble tipo automóvil Hatch Back, marca y línea Renault Sandero de placas HTR-086.

**TERCERO:** En consecuencia, **ORDENAR** a la demandada dentro del término de diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, restituir el bien mueble tipo automóvil Hatch Back, marca y línea Renault Sandero de placas HTR-086.

En caso de no verificarse la entrega real y material se librará despacho comisorio a la Alcaldía Local de la zona respectiva conforme al Acuerdo PCSJA17-10832 de 2017 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, con amplias facultades, de conformidad con el artículo 38 del Código General del Proceso, para que lleven a cabo la diligencia en comento, previo a la aprehensión del vehículo.

**CUARTO:** condenar en costas de este proceso a la parte demandada, en la suma de 2'000.000.

**Notifiquese,**

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ  
JUEZ**

Firmado Por:

Iris Mildred Gutierrez  
Juez Municipal  
Juzgado Municipal  
Civil 019  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **29006fcb25532f6bac48bd35211bde2a12bfd20b1bc09252878996ad4fdff0ef**

Documento generado en 05/05/2022 10:31:26 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**